
GABRIEL VALDES S.

1536 4514

UNIDAD

NACIONAL

Y

HUMANISMO

CRISTIANO

Discurso pronunciado por el
Presidente Nacional del Partido
Demócrata Cristiano, con ocasión
de la inauguración del Año Académico
de la Fundación Frei.
Hotel O'Higgins, Viña del Mar,
17 de abril de 1986

INDICE

¿Qué es la unidad nacional?	3
Un país dividido	5
La pérdida de voluntad política	7
No hay Estado de Derecho	8
Pobreza y exclusión social	8
Política económica y crisis	10
¿Por qué perdimos la Unidad?	11
Construir la unidad	12
Estado unitario descentralizado	14
Superar la pobreza	16
Una economía para el desarrollo	18
La lealtad democrática es el verdadero patriotismo	20
Las reglas del juego en la democracia	21
Epílogo: Una patria para todos	24

Discurso pronunciado por el Presidente Nacional del Partido Demócrata Cristiano, con ocasión de la inauguración del Año Académico de la Fundación Frei. Hotel O'Higgins, Viña del Mar, 17 de abril de 1986.

¿QUE ES LA UNIDAD NACIONAL?

Esta histórica y hermosa región es el lugar propicio para referirse a la crisis de la unidad nacional y para proponer una respuesta concreta de cohesión patriótica a la nación chilena.

Para enfrentar la incertidumbre en el futuro de la nación no son válidas las respuestas tradicionales. Suele ocurrir que la vieja política se recubre con ropajes nuevos para reproducir las mismas fórmulas que nos han conducido al fracaso. La tarea es otra. Hay que repensar a Chile. En serio y con profundidad, sometiendo los objetivos a una profunda revisión. La cuestión no es sólo de estrategias y tácticas. Ahora hay que revisar los fines de la acción pública. Esta interpelación debe modificar las prácticas y comportamientos de los partidos y grupos sociales. En breve, hay que cambiar el contenido de lo que se llama "hacer política".

Y, para partir de lo primero, iniciamos esta nueva etapa refiriéndonos a un tema capital para nuestra convivencia: la unidad nacional.

Para anticipar el futuro, nuestra propuesta debe ser a la vez profunda y concreta, capaz, por tanto, de suscitar nuevas energías populares, transformando la desesperanza en una nueva fe colectiva. Por ello, al referirme a la unidad nacional, daré una importancia decisiva a la cuestión regional. Invoco el proverbial espíritu de vanguardia y la fantasía creadora de Uds., los que miran hacia adelante, de los que miran hacia el mar, para iniciar el rescate de las regiones y del país, cuya decadencia tanto nos duele.

¿Qué es la unidad nacional?

¿Por qué nos preocupa?

¿Cómo conseguirla?

Trataremos de dar respuesta a estas preguntas que tocan tan vitalmente a la vida nacional en este tenso período de nuestra existencia.

No hay Patria sin unidad nacional. Y la Patria, en hermosas y recientes palabras del Cardenal Raúl Silva Henríquez, se constituye *"en el momento en que un grupo de hombres, que habitan físicamente un determinado territorio reconocen como suyo un mismo patrimonio de sangre y cultura, entran en comunión de tarea y destino. La Patria no se inventa ni se trasplanta, porque es fundamentalmente alma, alma colectiva, alma de un pueblo, consenso y comunión de espíritus, que no se puede violentar ni torcer ni tampoco crear por voluntad de unos pocos"*.

La unidad nacional es la búsqueda incesante de consensos y de solidaridad activa. La unidad nacional no es una teoría, no es tampoco la imposición de alguien o de algunos, es una forma de vida colectiva que tiene un fundamento ético y expresa el sentimiento de sentirse, todos, perteneciendo a un mismo pueblo.

Mucho más que un pasado, la unidad nacional es un proyecto, es un camino y es un desafío.

La unidad nacional no es la uniformidad. Por el contrario, dentro de la diversidad es el resultado del esfuerzo racional, ordenado y colectivo. Es la conciencia de que pertenecemos a una misma comunidad humana que desea vivir en paz, progresar y actuar frente al mundo.

Pero la unidad nacional no es sólo una conciencia histórica o un proyecto cultural. Tiene que plasmarse en una voluntad política, en una normativa constitucional y jurídica, en un orden social, en un sistema económico y en un comportamiento ético. Si cualquiera de estos cuatro componentes no existe o está lesionado, la unidad nacional se menoscaba o se destruye.

¿Por qué ahora nos preocupa tan profundamente este tema de la unidad nacional?

Porque observamos, como una realidad dramática, que ella no se da en ninguna de sus dimensiones básicas. Por el contrario, en Chile hemos llegado a un grado alarmante de división interna, muy superior a la que se vivió en 1973. No dudamos en calificar el grado de desunión de hoy como el más profundo y el más generalizado que haya experimentado nuestro país. Estas divisiones se han traducido en violencias crecientes, han producido un agudo aislamiento internacional y nos llevan a la decadencia como Nación.

UN PAIS DIVIDIDO

¿Cuáles son las mayores divisiones que sufre el país?

La primera es entre la gente común, entre la mayoría de los ciudadanos y el Gobierno. "Hay un divorcio muy profundo entre el Go-

bierno y una parte grande de la opinión pública”, ha expresado recién el Presidente de la Conferencia Episcopal.

Nunca en su historia Chile ha tenido un Gobierno tan aislado, encerrado en sí mismo y a la defensiva, sin proyecto, ni capacidad de escuchar ni satisfacer las mínimas aspiraciones de los ciudadanos.

En segundo lugar, hay una separación cada vez mayor entre civiles y militares. La naturaleza del mando militar aplicada a la política se traduce en represión y violencia. Y abren un abismo entre las Fuerzas Armadas y desorden y la población civil. Esto destruye la paz interna, que es base de la unidad nacional y, lo que es más grave, pone incluso en peligro la seguridad externa del país.

En tercer término, en estos doce años se ha hecho mayor la distancia y la desconfianza entre los grupos sociales claves del país: entre trabajadores y empresarios, campesinos y patronos, profesionales y autoridades, etc. El desconocimiento legal de las organizaciones propias de los trabajadores y de sus derechos, por una parte, así como la miopía de las organizaciones empresariales, por otra, que usan y abusan de las franquicias que les concede el régimen, contribuye a una falta de diálogo que daña la convivencia nacional.

En cuarto lugar, la falta de oportunidades para la juventud ha terminado por ahondar a niveles alarmantes la brecha generacional. Una juventud frustrada se torna cada vez más rebelde contra todo el sistema, amenazando la unidad nacional. El gobierno, en vez de abrir oportunidades para el futuro, recurre a la represión. Las Universidades se mantienen así intervenidas por militares que obedecen estrategias marcadamente represivas.

Finalmente, los doce años de experimentos con un modelo económico equivocado ha aumentado la distancia entre pobres y ricos.

No solamente las diferencias de sueldos e ingresos son mayores, sino que mientras unos pocos se benefician de servicios como hospitales y sistemas de salud más modernos, las grandes mayorías tienen menor acceso a servicios básicos de salud, educación y otros. El caso de los millones de pobladores de Santiago, Valparaíso y otras grandes ciudades es trágico irrefutable y cotidiano testimonio de esta inaceptable situación.

LA PERDIDA DE VOLUNTAD POLITICA

El país perdió su unidad cuando desapareció su voluntad política de acción común.

El dogmatismo de los partidos, del que ninguno es absolutamente inocente, fue interrumpiendo el diálogo, deteriorando el respeto al adversario y olvidando una noción de destino común como nación.

El debilitamiento del ser nacional —tenemos que reconocerlo— no es mero producto de este régimen. Somos testigos y víctimas de la culminación de un largo proceso de deterioro de una voluntad política de lograr acuerdos, que terminó en la peor de sus expresiones: la dictadura.

Este sistema ha eliminado o establecido severas restricciones a los derechos ciudadanos, de reunión, de libre expresión, sufragio y de elecciones así como las prohibiciones a los partidos y a otros canales naturales de expresión de voluntad ciudadana.

La dictadura hace decaer al país, lo corrompe intelectualmente y acumula tensiones. Tampoco queremos volver a la quebrada convención nacional de 1973. Nos interesa encontrar una unidad nacional renovada, fundada en la verdad y en la voluntad libre de todos los chilenos. Unidad en el pluralismo de ideas, creencias y cultos, unidad de la diversidad de los chilenos.

NO HAY ESTADO DE DERECHO

En Chile no existe Estado de Derecho.

Hemos entregado reiteradamente nuestro juicio sobre los vicios de la llamada Constitución de 1980.

Debemos agregar que este especial instrumento jurídico no cumple con la principal función de una verdadera Constitución: no distribuye el poder ni pone límites a su ejercicio.

La ley tiene que ser expresión de la libre voluntad del pueblo. Las bases indiscutibles de un verdadero orden institucional son la separación de los poderes del Estado, con su equilibrio de funciones, la garantía de los derechos básicos y de las libertades públicas, y la incorporación a la legislación interna de esa monumental obra de la civilización moderna que son los derechos humanos.

¿Cuáles de estos requisitos se cumplen hoy en Chile?

Ninguno.

Nos encontramos sometidos al uso discrecional de normas establecidas según la voluntad del detentador único del poder. Así la Constitucional es un mero decorado.

No existe supremacía constitucional en Chile. No prevalece, en la práctica, un cuerpo de normas superiores que verdaderamente den un marco a las relaciones entre los chilenos. Tal anomalía produce desigualdad ante la ley, genera privilegios y agrava arbitrariedades. Los mismos jueces se ven obligados a fallar de acuerdo a normas dictadas en el momento y para la ocasión.

POBREZA Y EXCLUSION SOCIAL

La pobreza y la exclusión social han deteriorado la convivencia nacional.

En el pasado, la unidad se fue construyendo a través de la incorporación progresiva de las personas y grupos marginales a la sociedad y la economía organizada. Así ocurrió en la historia de Chile desde la conquista. Después de la independencia se hizo a través de la conformación de un Estado que se preocupó especialmente de la educación pública. La sociedad civil, a través de sus múltiples formas de organización, contribuyó decisivamente a ese proceso de integración social.

Este camino se había continuado con decisión hasta principios de la década de los setenta. Si bien pueden haberse cometido errores y excesos, no hay duda que en este sentido Chile era un modelo de desarrollo social en América Latina. Nos enorgullecía con razón.

Lamentablemente ese proceso se detuvo, y hemos retrocedido en la última década. Encuestas recientes demuestran que más de la mitad de los jóvenes en las poblaciones periféricas de Santiago creen que la situación de ellos cuando sean adultos será peor que la que tienen sus padres.

Las últimas cifras oficiales sobre distribución del ingreso datan de 1978, dado que a este gobierno parece no interesarle publicar esas estadísticas. Pues bien, en 1979 el consumo promedio del quinto de familias más ricas multiplicaba por 6 el de los hogares más pobres. En 1978 había aumentado a 10. Y como los costos de la reciente crisis no se han repartido en forma pareja, la diferencia entre ellos es ahora de 18 veces.

Esto quiere decir que sí en 1969 el ingreso promedio del 20% más rico era de 100.000 escudos, el 20% de los más pobres era de 17.000 escudos. En cambio, en 1983 cuando ese grupo de los más pudientes ganaba 100.000 pesos los pobres ganaban sólo \$ 5.400 como promedio.

POLITICA ECONOMICA Y CRISIS

Todo lo anterior, decían los teóricos económicos del gobierno, debía ser tolerado porque era el costo transitorio que era preciso pagar para obtener un mayor crecimiento económico en el largo plazo y, por lo tanto, un nivel de vida mejor para todos, incluyendo los más pobres, en el largo plazo.

Pero como costo era inaceptable. Además no ha habido crecimiento. Hoy el ingreso per cápita de los chilenos es inferior; el desempleo es mayor, la dependencia del exterior es enorme, la inversión es más baja que nunca, y las perspectivas económicas son peores y más inciertas.

Para salir de este callejón, al Gobierno no le queda otra alternativa que ofrecer nuevos privilegios y franquicias a los grandes inversionistas nacionales y extranjeros. Así se inventan "capitalismos populares", se privatizan empresas públicas estratégicas, se entrega la administración de los fondos de pensiones a empresas multinacionales y se diseñan nuevos mecanismos financieros, como la posibilidad de invertir con pagarés de la deuda externa. Esto último, por ejemplo, significa crear un nuevo tipo de cambio preferencial, de alrededor de 300 pesos por dólar, accesible sólo a grandes financistas nacionales con buenos contactos en el exterior y a los inversionistas foráneos a quienes se le están vendiendo empresas que pertenecen a todos los chilenos.

Medidas como éstas no generan desarrollo económico, hieren la sensibilidad nacional y agudizan la sensación de injusticia ante la forma en que se administran los recursos públicos que pertenecen a todos los chilenos.

¿POR QUE PERDIMOS LA UNIDAD?

Para reencontrar nuestra unidad como Nación tenemos que preguntarnos qué nos llevó a perderla.

No cabe duda que las divisiones vienen de atrás. Por una parte, el desarrollo político estimuló un desarrollo social que generó demandas legítimas crecientes. Sin embargo, la base material no aumentó al mismo ritmo. El esfuerzo productivo, la conciencia de la necesidad de creación de riqueza, de innovación tecnológica y de disciplina social para el trabajo eran exigencias perentorias para responder a esas demandas. Pero las respuestas no estuvieron siempre a la altura de las necesidades expresadas.

Esta situación impuso al sistema político una tensión que no podía resistir por cuanto la sociedad civil misma no había asumido todas sus responsabilidades. Fue así como el país se politizó excesivamente.

Se exageró la lucha política y la aplicación de esquemas económicos globales rígidos, basados más en concepciones ideológicas que en una consideración de la realidad, y se deterioró la capacidad para buscar acuerdos y consensos. Todo esto culminó en la grave crisis política de 1973. Nosotros, los demócrata cristianos, asumimos la cuota de responsabilidad que nos corresponde. Reconocemos nuestros errores y de ellos, como de los ajenos, hemos adquirido experiencia.

Por su parte, los militares sostuvieron que el 11 de septiembre tomaron el poder para restablecer la paz interna. Ese fue, en el fondo, el primero y más profundo compromiso que asumieron.

¿Y cuál ha sido el resultado?

Si se responde con honestidad, como chilenos, al margen de cualquiera ideología, tengamos o no partido como técnicos o políticos,

militares o civiles, debemos reconocer que las divisiones entre los chilenos se han agudizado, y no disminuido, en los últimos trece años.

No lo dice solamente la oposición. Uno de los generales que dio el golpe en 1973 y participó en la primera Junta de Gobierno —Gustavo Leigh— ha expresado: “Es tal la crisis de este país por el desgobierno del autoritarismo personal, que si no se le pone atajo y se logra un acuerdo para volver a la democracia, inevitablemente terminaremos en una guerra civil”.

Porque, al margen de las buenas intenciones que pueden haber tenido algunos, se buscó la unidad imponiéndola por la fuerza y con violencia, desde arriba, por la vía de la persecución o la eliminación de aquellos que pensaban distinto.

En lugar de renovar la vida política, se la deformó hasta límites extremos. Se ahogó la libertad y se militarizó la sociedad, aplicándole la lógica de los amigos y los enemigos.

Desgraciadamente, esto no es casual. Si se opta por la última, la victoria se consigue por la vía del aniquilamiento del adversario. Pero ¿qué consigue esa estrategia cuando en verdad los “enemigos” son compatriotas, conciudadanos y aun familiares?

Aquí tenemos un sólo territorio que compartir y en el cual debemos convivir. Todos somos chilenos y ningún chileno es más chileno que otro.

CONSTRUIR LA UNIDAD

La unidad se construye, en primer lugar, sobre la base de la fe en el futuro de la patria; de la confianza en nosotros mismos y en nuestros compatriotas. Confianza en nuestra capacidad de gobernarnos pacíficamente y de trabajar unidos por un futuro mejor para todos.

Estoy absolutamente convencido que Chile es viable; que aquí sabemos y podemos

hacer bien las cosas para vivir en paz, derrotar con libertad la violencia y crear las condiciones espirituales y materiales para progresar con justicia y eficiencia.

A partir de esta convicción, la unidad se recupera con la voluntad política de forjarla. Para ello, se requiere dialogar con todos y encontrar lo que nos une.

Pero esto no depende de la voluntad de unos pocos, sea en posiciones de autoridad o al margen de ella. Es responsabilidad de todos los chilenos.

Para forjar la unidad hay condiciones éticas ineludibles. La unidad sólo se encuentra en la verdad y en la libertad.

Sin libertad no puede haber unidad porque la unidad es un proceso de actos voluntarios y, por tanto, libres, reflexivos e informados.

No hay reencuentro si unos pocos pretenden imponer por la fuerza su voluntad a la mayoría. Y no puede haber unidad si no se comienza por respetar los derechos básicos de toda persona humana: derecho a la vida, a la justicia, al trabajo digno, a la participación social y política.

Para unirnos, debemos reconocer las diferencias entre los chilenos, diferencias que deben ser respetadas porque son fruto de la misma libertad.

Y no habrá unidad si no se dice siempre la verdad, si se ocultan hechos, si se impide el derecho de los ciudadanos a estar verazmente informados. Esta transparencia es base, además, de la confianza en la autoridad y en el país.

Los Obispos lo han dicho en su última declaración *“La oscuridad en la cual han quedado varios crímenes políticos ha ido creando un clima de desconfianza y de sospecha, creando tensiones y odios que hacen mal a todos los chilenos”*.

ESTADO UNITARIO DESCENTRALIZADO

La unidad nacional supone también una recomposición del cuerpo político territorial. En la tercera década del siglo pasado el país inició una centralización necesaria que culminó con un éxito notable: Chile tuvo un verdadero Estado antes que la mayoría de las repúblicas congéneres de América Latina. Pero la centralización alcanzada fue considerada excesiva ya por los constituyentes de 1925, quienes establecieron disposiciones para revertir este proceso.

La excesiva centralización fue también preocupación evidente de los últimos gobiernos democráticos de Chile. Diversos planes de desarrollo y esfuerzos en favor de las regiones más débiles jalonan las gestiones gubernativas del período democrático: El Plan Chillán, los puertos libres, los polos de desarrollo, la industrialización de Concepción y Arica, de La Serena, etc., constituyeron en su época esfuerzos para contrarrestar la clásica centralista del estilo de desarrollo de América Latina durante el siglo XX. Por su parte, el régimen autoritario ha proclamado ostentosamente su proceso de regionalización y fortalecimiento de los municipios. Sin embargo, el apoyo económico a la gestión municipal y el Fondo de Desarrollo Regional no han contrarrestado las tendencias centralizadoras de la política neoliberal. Hay regiones, como ésta de Valparaíso, que han sufrido la destrucción de su plantel industrial y comercial.

Con todo, el vicio constitutivo de la actual regionalización es su carácter autoritario. La verdadera descentralización supone la democracia.

La regionalización autoritaria es la regimentación uniforme del cuerpo político, en que la base debe cumplir las órdenes emanadas de la cúspide. En verdad, lo que ha hecho

el gobierno es lograr la más óptima centralización por la vía de la descentralización de los servicios administrativos. Ciertamente, ésta no es descentralización.

Todas las democracias modernas de Europa como la de los Estados Unidos y las de América Latina asientan su desarrollo social y económico sobre una descentralización profunda y efectiva. Urge iniciar de veras este proceso, de modo de lograr un verdadero Estado unitario descentralizado. Se trata de una tarea larga, difícil, que requiere diversas etapas para su plena materialización. La democracia para consolidarse, debe facilitar el autogobierno de los ciudadanos. Al iniciarse el proceso, deben ya existir ámbitos determinados para la plena decisión política del pueblo, lo que supone la instauración de órganos políticos regionales de elección popular. Lo mismo vale para el Municipio: el Alcalde habrá de ser elegido por sufragio popular directo, para transformarse en el portavoz de un programa votado por la propia población, que debe ser responsable de su concepción, ejecución y control.

Hoy es más que nunca necesario el coraje para iniciar un proceso de descentralización, genuino, responsable y moderno. La desigualdad regional agrava la desigualdad social y provoca apatía y desaliento. Las élites regionales emigran hacia el centro y así las regiones pierden a los portavoces de su propio desarrollo.

La política en la capital se torna burocrática y cupular, ajena al sentir de los problemas verdaderos de los ciudadanos. Florece el culto por el ideologismo, tan ajeno a los problemas que agobian la vida en las regiones. Todas las preocupaciones convergen hacia el lugar central de la decisión, sin que pueda fortalecerse la vida de los partidos y las organizaciones en la bases sociales. El país vive sometido al pa-

ternalismo del Estado, con lo que el desarrollo deja de sustentarse en la base de la sociedad. Y los partidos llegan a ser los únicos canales trasmisores de las demandas regionales, que van a parar a la capital.

Los jóvenes perciben hoy el desafío regional. Ellos intuyen que la multiplicación de ámbitos de poder y decisión posibilitaría un pluralismo político y social más enriquecido. Las organizaciones populares, por su parte, admiten que el mejor desarrollo social es aquel que está próximo a los múltiples problemas de las comunas y regiones. Esto es válido con mayor razón en las comunas pobres y en las regiones deprimidas, donde la satisfacción de las necesidades básicas demanda una aproximación a los grupos que plantean reivindicaciones apremiantes.

Es hora de formular una nueva propuesta. Aquí en Valparaíso, anunciamos voluntad decidida de emprender la descentralización democrática. No habrá nunca una estrategia de desarrollo regional si ella no es asumida por la población, sustentada en su apoyo creador, organizada tras una mística, fundada en las propias raíces de cada región.

La diversidad regional es hoy una precondition para una unidad nacional enriquecida.

Basta de lamentos y de seguir esperando que otros hagan lo que nos corresponde mayor autonomía exige mayor responsabilidad. Lo que no puedan hacer ustedes aquí en esta región no lo hará nadie. Lo que no hagan los compatriotas en su respectiva región, valle o ciudad no lo hará nadie. Al Estado central le corresponderá incentivar y apoyar estos esfuerzos.

SUPERAR LA POBREZA

La unidad nacional se construye reduciendo las desigualdades sociales y económicas extremas.

Debe darse prioridad absoluta al esfuerzo de erradicar la extrema pobreza. Este compromiso de nosotros, los demócratas, no puede supeditarse ni al apoyo de la deuda externa ni a ninguna otra consideración.

Este es un desafío que compromete a todos los chilenos porque es un problema ético, y político capital. Es una vergüenza que Chile tenga un nivel de pobreza como el que observamos.

El mismo grado de solidaridad y espíritu de sacrificio que el país ha demostrado en las grandes emergencias deberá manifestarse para eliminar la pobreza en el plazo más breve posible.

El consenso alcanzado en el Acuerdo Nacional sobre esta materia es una comprobación de que esta meta no es una utopía.

De igual forma, es necesario poner fin al flagelo de desocupación que afecta a tantos chilenos por ya tanto tiempo.

Generar empleos es, para nosotros, antes que nada una obligación moral. Es condición de la dignidad del hombre y la integridad de su familia.

Además, es un requisito fundamental de la paz social y de la estabilidad democrática.

Asumimos la prioridad que otorga al trabajo humano la doctrina pontificia expresado recientemente en la instrucción sobre Libertad Cristiana y Liberación. *“La creación de puestos de trabajo es una tarea social primordial que han de afrontar los individuos y la iniciativa privada e igualmente el Estado”*.

Reconociendo la envergadura de esta tarea, la asumimos como ineludible. Y no se puede siquiera empezar a abordar este desafío, sin la decisión política efectiva de ponerlo realmente al centro de nuestra preocupación como sociedad. La tarea de generar empleo no es de unos pocos funcionarios, ni de un sector eco-

nómico en desmedro de otros. Debe ser el primer objetivo de una concertación profunda y visionaria entre empresarios, trabajadores y Estado. Con inversión y crecimiento, un esfuerzo así irá en beneficio de todos.

Necesitamos asumir una mística del trabajo, y el Estado debe destinar todos los recursos y usar toda su batería de políticas e instrumentos económicos para resolver este dramático problema.

UNA ECONOMIA PARA EL DESARROLLO

Debo, someramente, reiterar nuestra concepción acerca del orden económico, ahora en la perspectiva de la unidad nacional.

La economía tiene que estar al servicio del hombre, a través de las decisiones libremente determinadas por el pueblo.

El país requiere un crecimiento económico elevado y sostenido.

Para ello se necesita normas claras y estables sobre los derechos y obligaciones tanto del Estado como el sector privado para que cada uno pueda desplegar toda la capacidad potencial de aporte al desarrollo nacional. Por eso nos hemos preocupado de incluir este tema en el Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia se dice: *“Es indispensable eliminar cualquier incertidumbre respecto al régimen socioeconómico que imperará una vez establecida la normalidad”*.

Propiciamos una economía mixta. El Estado tiene una función irrenunciable de conducción y programación del desarrollo económico.

Se debe mantener la propiedad de aquellas empresas públicas que responden a actividades principales o estratégicas de la economía del país.

No se trata de aumentar la dimensión del Estado, sino de usar bien su capacidad operativa y ponerla al servicio del desarrollo. Hay entidades, como la Corporación de Fomento, que deben reasumir sus funciones de promover con audacia la actividad productiva y la innovación tecnológica.

Debemos felicitarnos de que las grandes empresas estatales hayan sobrevivido admirablemente a la desastrosa gestión económica que por tantos años ha azotado al país, particularmente en el campo industrial.

Nos resulta inexplicable que en este marco de economía mixta, el empresario privado se sienta temeroso de un futuro régimen democrático. Sostenemos sin vacilación que Chile necesita muchos más empresarios. Por ello, la empresa grande, mediana, pequeña e individual debe ser apoyada y no obstaculizada. Su relación con el Estado, como sucede en todos los países modernos, debe ser de concertación. No es posible seguir empantanados en un debate estéril, que refleja un verdadero subdesarrollo mental entre los que creen que existe una oposición insalvable entre Estado y empresa privada.

El crecimiento económico requerirá un aumento considerable del ahorro y de la inversión. Esto exigirá austeridad y sacrificio.

Sabemos que la capacidad de ahorro interno tiene límites. Por ello necesitamos crédito e inversión externa. Nos interesa fundamentalmente esa inversión extranjera que venga a aumentar la producción y generar empleo.

Creemos que es necesario profundizar el esfuerzo exportador, mediante la búsqueda de acuerdos de integración, que son la forma moderna de asegurar mercados más estables para productos manufacturados. Particularmente, habrá que promover un programa de complementación económico amplio con Argentina.

El gran desafío para nuestro desarrollo es detectar y concentrar nuestra inteligencia y esfuerzo en determinadas áreas productivas que logren insertarnos en las corrientes más dinámicas del avance tecnológico de la sociedad industrial moderna. A este tema tan decisivo le dedicaré próximamente una atención especial.

LA LEALTAD DEMOCRATICA ES EL VERDADERO PATRIOTISMO

La unidad nacional supone una verdadera lealtad democrática. No hay idea de Chile sin una concepción democrática. La historia del país es una historia del país es una historia sin sentido si no la observamos como un proceso ininterrumpido de democratización. En el presente y en el futuro, la relación entre nación y democracia marcará la vida de los chilenos.

En las "patrias autoritarias", en las "patrias totalitarias", sean del signo ideológico que sean, habrá siempre una patria de destierro para los derrotados. Cuando unos ganan, los otros tienen que irse o vivir humillados.

En cambio, los que hacen crecer la democracia hacen crecer la Patria. Hay una cultura democrática en el arte, las ciencias, la literatura, la comunicación y la vida social, que conduce a la cooperación mutua. Esa cultura promueve la grandeza personal y colectiva porque a la larga sólo en libertad se es capaz de crear.

En el pasado y en el presente hemos conocido la cultura de la mentira. Por ello, no aceptamos el periodismo del odio, que tanto contribuyó al desprestigio de las personas y las instituciones democráticas, no la desinformación como sistema, ni el monopolio de las comunicaciones. Porque la libertad de información es un fundamento vital, prioritario en

la vida civilizada, y el mejor guardián de la libertad política y cultural.

Nunca más debe repetirse entre nosotros la desvergonzada manipulación informativa que a diario hace el Canal Nacional, perteneciendo a todos los chilenos, es usado impudicamente como un aparato de propaganda del gobierno y el régimen.

También debemos decir, con claridad:

Nunca más, la tortura que envilece.

Nunca más el exilio.

Nunca más, el asesinato.

Nunca más el acto terrorista.

Castigarlos no es sólo responsabilidad de los poderes públicos. Es una obligación de toda la sociedad.

En suma, nunca más el odio que nos empequeñece y destruye la Patria común.

LAS REGLAS DEL JUEGO DE LA DEMOCRACIA

Enfrentamos el desafío de reconstruir la democracia en Chile.

Permítanme insistir una vez más en este tema tan repetido como crucial.

La democracia es antes que nada voluntad de ser libre. Voluntad de libertad individual y voluntad de libertad como nación. Un pueblo que no quiere ser libre no podrá vivir en democracia. Un pueblo que quiere ser libre no podrá vivir indefinidamente en dictadura.

En segundo lugar, la democracia supone respeto entre las personas. La dignidad, la honorabilidad, el cumplimiento de los acuerdos y la altura para discutir son rasgos ineludibles en una democracia que nace y que quiere consolidarse.

En tercer lugar, la democracia requiere de demócratas verdaderos. Quien busque en la democracia una oportunidad táctica para incubar o resguardar gérmenes dictatoriales no

sólo no es un demócrata, sino un desleal con Chile. Nosotros creemos verdaderamente en la democracia. Nuestra lucha por ella no es "por si acaso" ni "hasta por ahí no más". Es una fe de siempre en el más civilizado y humano sistema de gobierno para un país.

Que lo sepan una vez más todos los chilenos. ¡No en vano, nos llamamos demócrata cristianos! Por ello somos atacados por los que temen la libertad y sólo se mueven por el temor o el antiotros.

Por último, la democracia supone instituciones democráticas. No existe otra vía para regular jurídicamente nuestra democracia futura que la legitimidad popular de un texto constitucional. Consideramos imprescindible que la Constitución se origine en un Poder Constituyente, o sea en el pueblo chileno.

El contenido de la Constitución debiera atender a los siguientes elementos:

En primer lugar, debe establecerse un cuerpo de disposiciones no sujetas a modificaciones. La definición de un Estado de Derecho, el derecho a la vida, la soberanía nacional, los derechos básicos y las libertades públicas no pueden estar sujetos a modificaciones porque son principios inherentes a la existencia de la democracia y su valor va más allá de mayorías parlamentarias o de cambios en el comportamiento político de la sociedad.

En segundo término, será necesario un acuerdo sobre el régimen político, la forma de gobierno y la forma de Estado. Somos partidarios de un Estado unitario y descentralizado, teniendo siempre cuidado de armonizar el rigor jurídico con la capacidad de las instituciones para adaptarse al proceso político y a los cambios sociales.

Estamos por una democracia moderna que incorpore la experiencia constitucional de las democracias europeas de la postguerra y de las

nuevas democracias en España y Portugal y en América Latina.

Estamos por un equilibrio verdadero entre los poderes del Estado, sin predominio peligroso del Ejecutivo ni del Parlamento. Entendemos además que es básico instaurar un adecuado sistema de resguardo de la constitucionalidad y de la legalidad a fin de garantizar los derechos de cada uno y el imperio de la justicia en la sociedad.

La institucionalidad democrática evitará que se imponga el despotismo o la anarquía. El Estado de Derecho se desnaturaliza tanto por el poder total concentrado en una persona o en unos pocos, como por el desgobierno y el desorden. El verdadero Estado de Derecho resguarda la libertad del ciudadano frente al gobierno, pero garantiza la vigencia de la autoridad. ¡Ni la democracia protegida, ni libertinaje y caos! Esa es la gran tarea del orden institucional democrático al que aspiramos.

No queremos eludir el tema de la protección de la democracia. No incurrimos en la ingenuidad de creer que la sola vigencia de la Democracia impedirá la acción de quienes trabajan por destruirla. El terrorismo, los extremismos de derecha y de izquierda, los conspiradores profesionales seguirán asolando todo intento de la mayoría por vivir civilizadamente. La democracia deberá defenderse democráticamente, con apego al orden jurídico, a los derechos esenciales, pero con la fuerza de la autoridad que emana de la legitimidad popular.

No estamos por exclusiones por razones de las ideas. Estamos, como lo sostiene el Acuerdo Nacional, por "*sancionar las conductas que atenten contra la convivencia democrática*". Se debe ser inflexible para garantizar tanto lo uno como lo otro. En razón de la seguridad, no se puede incurrir en el exceso de

poder, como tampoco por mera benevolencia debilitar la autoridad.

EPILOGO: UNA PATRIA PARA TODOS

Nuestro anhelo de unidad nacional se ha plasmado en el lema de una "Patria para todos".

Dicho lema sintetiza nuestra profunda ansia de comunicación y concordia patrióticas.

Una Patria para todos significa disciplina democrática para conseguir los fines perseguidos en común. Una Patria para todos sintetiza la unidad en la diversidad. Una Patria para todos no es romanticismo, sino el único realismo que prepara un futuro con potencialidades humanas para las actuales y próximas generaciones.

Nuestra fe en las posibilidades de alcanzar una Patria para todos se funda en el valor de nuestras concepciones para interpretar la voluntad de ser de Chile. Y la voluntad de ser se afirma en el amor al entorno propio que humaniza la naturaleza.

Esta tierra, este viento y este mar de Valparaíso son el lugar para proclamar, una vez más, el mandato que a todos nos dejara el Presidente Eduardo Frei: *"Algún día va a llegar el soplo de la libertad. Pero hay un testimonio que tenemos que dar: prepararnos y organizarnos porque en este momento los países recurren a los que están unidos, firmes y que tienen claras las ideas"*.